

La política laboral de la Revolución Libertadora

Un nuevo escenario para el movimiento obrero

Por Alejandro Schneider

El golpe de Estado de septiembre de 1955

En algunos aspectos, el régimen de facto de 1955 implicó una cierta “vuelta atrás”, al marginar del sufragio a un importante sector de la sociedad y al tratar de imponer la hegemonía de la vieja fracción de la burguesía terrateniente en el bloque de poder. Sin embargo, la coyuntura histórica demostró que un regreso al modelo agro-exportador era imposible así como también era poco viable erradicar la concepción de ciudadanía social y los derechos laborales obtenidos por los trabajadores.

En septiembre de 1955, el general Juan D. Perón fue derrocado por una coalición integrada por amplios sectores de la burguesía y de la clase media, dirigida por los sectores tradicionales cercanos al *establishment* y la Iglesia Católica. La composición del gobierno de Eduardo Lonardi y la propia Revolución Libertadora reflejaron esa heterogénea gama de apoyo social. En este sentido, durante su presidencia comenzaron a debatirse dos asuntos esenciales. Por un lado, se discutió la orientación económica que iba a desarrollar el país. En otras palabras, qué grupos se beneficiarían con el nuevo modelo de acumulación de capital. Por otra parte, se planteaba qué hacer con el peronismo y con las transformaciones que había incorporado en la clase obrera. Pese a la existencia de estas controversias, su interregno giró, primordialmente, alrededor de la relación con los gremios.

Lonardi y sus seguidores sabían que los sindicatos en manos de los dirigentes peronistas eran un elemento de control y un canal orgánico de la protesta social. Desde hacía varios años que las prácticas de los representantes gremiales distaban de ser democráticas y, a la vez, habían asumido como función primordial, sino excluyente, un papel de mediadores entre los trabajadores, los empresarios y el Estado.

Por otro lado, la postura conciliatoria de la cúpula sindical tuvo su plena ratificación con las declaraciones del secretario general de la Confederación General del Trabajo Hugo Di Pietro, formuladas el mismo día en que se confirmaba el triunfo del golpe contra Perón, cuando afirmaba que los “compañeros trabajadores” debían “mantener la más absoluta calma y continuar en sus tareas, recibiendo únicamente directivas de esta central obrera”.¹

Esas expresiones no fueron las únicas. La postura gremial era coherente con el comportamiento desempeñado bajo el gobierno justicialista; ya que sus intereses no se correspondían con la clase trabajadora que decían representar. Tampoco fue un hecho menor, que su obrar estuvo enmarcado por la propia prédica y proceder del general derrocado durante el levantamiento. Por ese entonces, el ex presidente declaró que las posibilidades de enfrentar el alzamiento con “éxito eran absolutas”; sin embargo, para ello, “hubiera sido necesario prolongar la lucha, matar mucha gente y destruir lo que tanto nos costó crear. Bastaría pensar lo que habría ocurrido si hubiéramos entregado las armas de nuestros arsenales a los obreros que estaban decididos a empuñarlas”.ⁱⁱ

De esta manera, las declaraciones de los dirigentes y los deseos de Perón no enturbiaron el proyecto de Lonardi. De acuerdo con el comportamiento de estos actores, estaban dadas las condiciones para que funcionara el modelo propuesto por el nuevo presidente. En estas circunstancias, se tendió un puente hacia la CGT a través del ministro de Trabajo y ex asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica, Luis Cerrutti Costa. Por esta vía se garantizaba mantener la estructura sindical heredada, a cambio de que el movimiento obrero no se convirtiera en un agente perturbador del poder. Sin embargo, más allá de las supuestas buenas intenciones que implicaron ambas posturas, la realidad y los intereses de las distintas clases sociales quebraron este intento de convivencia idílica; había sectores que no aceptaban esta paz consensuada.

Grupos armados de antiperonistas, los llamados “comandos civiles”, comenzaron a ocupar los locales de los sindicatos de ferroviarios, gráficos, bancarios y petroleros, entre otros. Sus acciones buscaron beneficiar a algunos jefes gremiales que habían sido excluidos bajo la gestión peronista. Empero, sus prácticas violentas de hacerse cargo “de facto” del control de las organizaciones obreras terminaron generando serias dificultades a la anhelada convivencia pactada. Ante estos hechos, los trabajadores se alzaron contra el gobierno y contra todas aquellas personas que lo representaban, desconociendo la voluntad pacificadora de Perón, Lonardi y los dirigentes cegetistas; estaba naciendo la “Resistencia Peronista”.

La impugnación obrera a los acuerdos entre la CGT y Lonardi

La denominada “Resistencia Peronista” fue un fenómeno generalizado de impugnación social. De este modo, no comprendió solamente a obreros identificados con esta

tendencia política sino que también incorporó a una vasta cantidad de personas de diferentes extracciones ideológicas.

En realidad, el movimiento opositor se inició el día en que se produjo el asalto contra el gobierno constitucional. La clase obrera, en los principales centros fabriles, respondió y enfrentó --en forma autónoma-- al golpe de Estado. Los trabajadores se atrincheraron para defender sus conquistas, sus formas de organización y el lugar que habían ganado en la sociedad. La experiencia y la conciencia, legados de décadas de protestas con sucesivos regímenes, se manifestaron en estos enfrentamientos y los que signaron los siguientes veinte años de historia argentina. En 1955, la ausencia de una dirección sindical y política, que estuviese dispuesta a enfrentar consecuentemente el alzamiento militar, hizo que la contienda asumiera (en los primeros meses) un carácter desorganizado, anárquico y --sobre todo-- espontáneo.

La política de diálogo con la cúpula cegetista iniciada por el gobierno no puso fin a esta situación. Las medidas de fuerza --surgidas por fuera de la dirigencia gremial-- continuaron en protesta contra los ataques de los comandos civiles y el creciente número de trabajadores detenidos por las autoridades. Los cambios ocurridos en la CGT, con la renuncia de Di Pietro y la asunción de una nueva cúpula encabezada por Luis Natalini, Andrés Framini y Dante Viel, tampoco lograron calmar el panorama laboral. Aunque estos dirigentes constituyeron una continuidad con la conducta negociadora de los anteriores, los compromisos pactados no conformaron a los líderes gremiales del Partido Socialista, como el municipal Francisco Pérez Leirós, ni a los sectores liberales de las Fuerzas Armadas, que insistieron en una depuración completa del peronismo. Más importante aún, la mayoría de la clase obrera no coincidió con este triunvirato sindical y con el contubernio alcanzado con los “libertadores”. Los ceses de actividades del 17 de octubre y del 3 de noviembre de 1955 demostraron, en los hechos, su rechazo a la actitud dialoguista de los jefes de la central laboral.

La primera fecha, la conmemoración del Día de la Lealtad, no pasó inadvertida para la sociedad. Ante ese aniversario, el Poder Ejecutivo prohibió efectuar medidas de fuerza. La orden fue aceptada por la dirigencia de la CGT, que aconsejó “a los trabajadores” concurrir “normalmente a sus tareas”.ⁱⁱⁱ No obstante, la clase obrera ignoró tales exhortaciones y llevó adelante diferentes formas de protesta; por ejemplo, los trabajadores de Lanús y Avellaneda abandonaron durante esa jornada sus fábricas y se concentraron en la avenida Pavón, haciendo frente a la represión de tanquetas del Ejército.^{iv}

Una situación semejante se presentó el 3 de noviembre. En forma previa, la central obrera había propuesto un cese de actividades para esa fecha, ante los intentos de “avasallar la autonomía del movimiento sindical”.^v Pese a ese llamado, horas más tarde, la medida fue cancelada ante un arreglo celebrado con las autoridades gubernamentales; testimonio de ello fue la alocución de Framini, ante los micrófonos de LRA Radio del Estado, convocando en la medianoche del 2 de noviembre a “la masa trabajadora a no faltar a sus tareas”.^{vi} No obstante, un sector del proletariado industrial desconoció el pacto de la cúpula cegetista y suspendió parcialmente sus labores.

En buena medida, debido a este diálogo establecido entre el gobierno y la CGT y, especialmente, ante la incapacidad de contener las protestas sociales, el ala liberal de la Revolución Libertadora destituyó a Lonardi e impuso al general Pedro E. Aramburu al frente de la presidencia el 13 de noviembre de 1955. La central sindical, ante los cambios en el panorama político, viéndose afectada por los hechos acontecidos y cifrando sus expectativas en el sector nacionalista desplazado, convocó a la realización de una huelga general por tiempo indeterminado. Con todo, los dirigentes gremiales dejaron al azar la medida de fuerza, que se extinguió a los pocos días, frente a la represión desatada sobre el movimiento obrero.^{vii}

El breve interregno de Lonardi se había cerrado. Más allá de los diferentes análisis que se pueden efectuar sobre su gestión presidencial, surgen serios indicios para considerar que el panorama abierto en el país con el derrocamiento de Perón no daba lugar a políticas conciliatorias. Esa situación de equilibrio inestable tendía a resquebrajarse. Tampoco había lugar para posturas intermedias. El obrar desplegado por los trabajadores condicionaba todo tipo negociación institucional.

La política laboral de Aramburu

Los lineamientos políticos generales del nuevo presidente estuvieron concentrados en dos asuntos básicos, íntimamente vinculados entre sí. El primero de ellos fue el de tratar de cambiar el sistema de acumulación de capital que por entonces imperaba en el país; para eso se propuso anular las conquistas sociales y económicas obtenidas por la clase obrera. En segunda instancia, la administración castrense quiso erradicar al peronismo de la sociedad.

Para concretar sus fines, tanto el gobierno como los empleadores aunaron acciones a fin de aumentar los niveles de productividad obrera y la racionalización de las tareas; se

quiso modificar la organización laboral del proceso fabril imperante hasta entonces. Con ese objetivo se buscó atomizar, disgregar y debilitar la gestión sindical, atacando la base organizativa de los trabajadores: los cuerpos de delegados y las comisiones internas. En particular, donde éstos hacían sentir su peso, dentro de las fábricas, discutiendo las decisiones empresarias. En este marco, una de las primeras medidas ordenadas fue la intervención militar de la central obrera, a cuyo frente se nombró al capitán de navío Alberto Patrón Laplacette, y la de numerosos sindicatos adheridos a ella. Meses más tarde, el régimen de facto, mediante el Decreto 4.161, prohibió cualquier alusión al justicialismo. También dispuso la negativa de ocupar cargos gremiales a quienes habían actuado en puestos jerárquicos en la CGT entre 1952 y 1955. Posteriormente, esta norma legal se extendió a dirigentes de segunda línea y a miembros directivos de seccionales. Valga aclarar que este proceso fue acompañado con numerosas persecuciones y detenciones gremiales. Por otra parte, en mayo de 1956, se ordenó la suspensión de la reglamentación laboral vigente. Esto quebró el principio de sindicato único por actividad, acordado por la Ley 23.852 de Asociaciones Profesionales, y se estableció que los trabajadores de cada industria fuesen representados por más de una entidad gremial. De manera simultánea, el decreto 2.739/56 buscó atomizar la organización de la clase trabajadora derogando las resoluciones jurídicas que permitían la agremiación conjunta del personal técnico, de supervisión y de vigilancia con el plantel obrero.

Unida a estas disposiciones, el gobierno se propuso destruir el pilar que sostenía todo el andamiaje laboral: los organismos de base fabril. En ellos se concentraba no sólo el último bastión obrero que frenaba los incrementos en los ritmos de productividad, sino también simbolizaban la contracara del poder de la clase dominante en el ámbito de la producción. La intención era cambiar la relación de fuerza que imperaba en las fábricas y que se había consolidado en los primeros años del justicialismo. Perón, en realidad, durante su segundo mandato, ya había perseguido este fin con el Congreso de la Productividad de 1955. El régimen militar, continuando con estos postulados, sostuvo “el propósito de llevar a la práctica las conclusiones” alcanzadas en esa convención.^{viii}

En este contexto, el presidente dictó un decreto por el cual se autorizaba un aumento salarial del diez por ciento sobre los topes acordados en las paritarias de 1954. Además, se intentó negociar que los futuros incrementos fuesen pautados según los niveles alcanzados por la productividad laboral. Esta disposición no fue la única. Más importante todavía, por la misma norma legal, se revisó los convenios colectivos de trabajo vigentes. Se buscó

instrumentar el traslado interno del personal fabril, se dispuso de nuevos esquemas de incentiación y se dejó abierta la posibilidad de firmar contratos individuales.^{ix} Sin embargo, esta nueva reglamentación, no alcanzó a aplicarse en gran escala. La resistencia de los obreros frente a esas medidas y las contradicciones internas existentes en el régimen castrense con respecto a la política económica impidieron su efectivo empleo.

Por otra parte, para poner en marcha todas estas medidas, y considerando que eran necesarias las organizaciones gremiales, el gobierno requirió que las entidades estuvieran controladas por hombres afines, en parte, a sus ideales: los denominados sindicalistas “libres” o “democráticos”. A pesar de esta aspiración, estos dirigentes no obtuvieron el lugar que había sido diseñado por el régimen, ya fuese tanto porque habían perdido espacio en la mayoría de las fábricas durante la presidencia de Perón como por las posturas que los identificaban con los empleadores y la Revolución Libertadora.

La protesta obrera en las fábricas y la vieja dirigencia gremial

Éste no fue el único fracaso de la gestión presidencial de Aramburu. La resistencia obrera continuó y alcanzó nuevas formas, tendiendo a limitar e impugnar el proyecto del gobierno. Las discusiones salariales de los convenios colectivos alentaron el surgimiento de numerosas medidas de fuerza, que en su dinámica no sólo quebraron el tope de los haberes sugeridos por las autoridades de la cartera económica sino que, más importante aún, contribuyeron a la reorganización de la propia clase. En esas circunstancias confluyeron una serie de conflictos originados alrededor del aumento de los ritmos de producción, las formas de reordenamiento del empleo, la preservación de la organización gremial, el atraso en el cobro de sueldos y en contra del despido arbitrario de activistas. Estas acciones estimularon una notable recomposición de las bases gremiales: como consecuencia nacieron nuevos cuerpos de delegados y comisiones internas.

De este modo, sólo en la ciudad de Buenos Aires y considerando únicamente huelgas declaradas ante el Ministerio de Trabajo y Previsión, las jornadas perdidas aumentaron de 144.120 días en 1955 a 5.167.294 para 1956.^x En realidad, desde fines de 1955 y durante 1956, en diferentes fábricas metalúrgicas (Catita, Atimsa, Philips, Siam, Klockner, Piazza, Carma, Siambretta) hubo protestas en demanda de solución de los problemas antes mencionados. Por su parte, cerca de ocho mil trabajadores de astilleros de la Federación de Obreros en Construcciones Navales de Avellaneda, Dársena Sur, San Fernando, Almirante

Brown, entre otros, llevaron a cabo reiteradas medidas de fuerza y masivas asambleas durante varias semanas, en contra de las modificaciones en las normas laborales y las suspensiones dispuestas por las empresas estatales y privadas del sector. Sin embargo, no todos los enfrentamientos se prodigaron mediante paros, hubo una numerosa cantidad de trabajos a desgano y a reglamento. Asimismo, se efectuaron varios actos de sabotaje; estos últimos abundaron, según la crónica diaria, en el gremio ferroviario.^{xi} Estas iniciativas no se limitaron únicamente a defender conquistas que se hallaban avasalladas, también dejaron una notable experiencia organizativa. Durante su transcurso surgieron comités clandestinos, que en la práctica se convirtieron en organismos de lucha, en reemplazo de aquellos que estaban proscritos.

De este modo, como resultado de las expresiones de protestas emergió una nueva camada de activistas sindicales con posturas más intransigentes y combativas, en comparación con la existente bajo la presidencia de Perón. Éste proceso democrático se expresó por medio de una activa participación, cobró forma tanto con el surgimiento de numerosas agrupaciones contrarias al movimiento de los “sindicalistas libres” como con la celebración de masivas asambleas. Asimismo, representó la efectiva consolidación –pese a la dictadura militar-- de las comisiones internas y/o los cuerpos de delegados junto con sus amplias y respectivas funciones en el seno de la producción.

A pesar de la novel militancia gremial, el fenómeno fue encauzado y dirigido por líderes que contaban con una vasta experiencia en el manejo de las asociaciones profesionales, por ende –en muchas circunstancias-- practicaban y mantenían un control burocrático en sus organizaciones. Sus integrantes no habían nacido en esos años. La jefatura sindical, surgida a partir de 1955, tenía sus raíces en la organización del período inmediato anterior: Andrés Framini, José Alonso, Amado Olmos, Paulino Niembro, Augusto Vandor. A esta nómina se le pueden añadir aquellos hombres no provenientes del justicialismo: Riego Ribas, Francisco Pérez Leirós, Rubens Iscaro, entre otros. En suma, si bien el alejamiento y la proscripción de Perón y su partido permitieron un mayor grado de autonomía en su comportamiento sindical y político, comparado con la década anterior, esto no significó que hubiera habido un cambio en cuanto a la conducta y el proceder de los líderes en el seno de los organismos gremiales. En otras palabras, es correcto afirmar que la mayoría de estos hombres no controlaban la central laboral en los últimos años de la administración peronista; sin embargo, su formación y su práctica como dirigentes medios-altos databan de ese período.

El conflicto metalúrgico de 1956: la consolidación de Augusto Vandor en el gremio

Mientras tanto, la política primigenia de las autoridades de conceder sólo un diez por ciento del aumento salarial quedó atrás. Se otorgó un incremento superior a lo pautado, producto tanto de una serie de enfrentamientos laborales como por la inclinación gubernamental de favorecer a los sindicatos acaudillados por los “líderes libres”. De todos estos conflictos, el de la UOM fue un caso testigo: en él convergieron la resistencia obrera a la ofensiva dictatorial y empresarial, la dirigencia formada en el período anterior y el surgimiento de un nuevo activismo, con los límites que mostraban estos procesos.

A mediados de 1956, la intervención militar en el gremio dispuso la reunión de los representantes obreros con miembros de la Federación Argentina de la Industria Metalúrgica para negociar el convenio colectivo del sector. Dicha paritaria tuvo como objetivos acordar los nuevos incrementos en los haberes y, más importante aún, concertar normas laborales que convalidaran un aumento de la productividad dentro de lo dispuesto por el decreto 2.739/56. Empero, el contexto conflictivo de ese año, sumado a la reorganización experimentada por la clase trabajadora, impidieron que estos asuntos se resolvieran fácilmente. El estancamiento de las tratativas derivó en una huelga general de más de cincuenta días entre noviembre y diciembre.

La protesta mostró un alto despliegue y tuvo un importante impacto en el conjunto de la sociedad; pese a no tener una dirección homogénea y centralizada. Esto último fue uno de los elementos que la caracterizó y, en cierta forma, la limitó en su operar. A la vez explica como, durante el desarrollo del paro, algunas seccionales (Avellaneda, Capital Federal, La Matanza, Vicente López) manifestaron una notable actividad mediante la confección de boletines de huelga, reuniones con cuerpos de delegados y obreros de diferentes empresas ajenas al gremio, comisiones de ayuda para conseguir fondos y alimentos entre los barrios, etcétera.

Sin embargo, esto no alcanzó para cambiar la ofensiva empresarial y gubernamental sobre los trabajadores, que incluyeron despidos y detenciones. Después de tres semanas de protesta, se dispuso un aumento del 38% sobre los haberes del convenio colectivo de 1954. Ante la negativa de los metalúrgicos de aceptar la conciliación, no tanto por el incremento salarial sino por los cesanteados, el Poder Ejecutivo optó por dividir el conflicto, firmando pactos con seccionales del interior del país, mientras concentró la represión en el Gran Buenos

Aires que continuó con la medida de fuerza.^{xii} Con este panorama de fondo, el 26 de diciembre de 1956, el Plenario Nacional Metalúrgico votó finalizar el cese de actividades.

El resultado de este conflicto repercutió en la clase obrera en las siguientes décadas. La protesta permitió consolidar la figura de Vandor como hombre fuerte de la UOM y, luego, como dirigente del conjunto del movimiento sindical. Además, el desarrollo del paro demostró las características y los límites que exhibieron la denominada “nueva camada de dirigentes”, y los alcances de la democracia obrera.

La Comisión Intersindical y el nacimiento de las 62 Organizaciones

Si bien en los principales gremios industriales hubo algunos conflictos en donde no se alcanzaron los resultados salariales esperados, los trabajadores fueron adquiriendo un notable saldo organizativo que se tradujo en la formación de agrupamientos sindicales que superaron los fines impuestos por las entidades laborales. Como consecuencia emergió una camada combativa de activistas. Sin embargo, en parte, producto del fracaso de varias medidas de fuerza, esta novel militancia gremial quedó controlada por aquellos dirigentes sindicales que contaban con una amplia experiencia en el manejo de las asociaciones profesionales.

El proceso de conformar un organismo intergremial empezó a adquirir forma, en febrero de 1957, con el nacimiento de la Comisión Intersindical. La fuerza impulsora de este agrupamiento fue el “Movimiento Pro Democratización de los Sindicatos”, una agrupación colateral del Partido Comunista, que dirigía algunos gremios: Químicos, Madera, Aceiteros, Prensa y Construcción. Su programa inicial fue un petitorio que pedía la libertad de los trabajadores encarcelados, la finalización de las intervenciones militares en los sindicatos y en la CGT, el restablecimiento de precios máximos para artículos de primera necesidad, la derogación del estado de sitio y de otras leyes restrictivas de los derechos de los obreros.^{xiii}

La Intersindical se extendió a numerosas entidades con rapidez; tanto el proceso normalizador de los gremios como la importante cantidad de enfrentamientos durante el primer semestre de 1957, ayudaron a su desarrollo. Su expansión se enriqueció con el ingreso de diferentes organizaciones laborales, muchas de ellas dirigidas por el peronismo. Como consecuencia de este clima, la Intersindical emprendió la conmemoración del 1º de mayo en Plaza Once de la ciudad de Buenos Aires. Este mitin fue la primera manifestación obrera opositora pública desde 1955, congregó a más de diez mil personas. El evento reflejó los

fuertes debates internos que se cruzaban entre los gremios liderados por el Partido Comunista y los encabezados por el justicialismo. Aunque estos últimos no conformaron una tendencia homogénea, su presencia se impuso en el conjunto de las asociaciones que la integraron. Así, durante los siguientes meses, la Comisión Intersindical fue ocupando un espacio considerable: el 14 de junio se llevó adelante un paro general de una hora, con un alto nivel de acatamiento. Unas semanas más tarde, el 12 de julio, realizó una huelga general de veinticuatro horas; cifras no oficiales estimaron que cerca de dos millones y medio de trabajadores adhirieron a la medida de fuerza.^{xiv}

Producto de los continuos reclamos laborales, Aramburu intentó canalizar el descontento mediante el control de la CGT a través de sus dirigentes gremiales afines. Con ese propósito, el interventor de la central convocó, en el mes de agosto, a un “Congreso Extraordinario de Delegados de las Organizaciones Adheridas”, que debía adoptar sus nuevos estatutos y poner fin a la intervención. La reunión, a pocos días de iniciada, fue clausurada por Patrón Laplacette debido a que no pudo imponer a sus agentes sindicales en la comisión de poderes encargada de verificar las credenciales de los delegados al comienzo del encuentro.

Como consecuencia de estos hechos, y reflejando la situación política del país, se conformaron dos nucleamientos gremiales que dividieron --en forma institucional-- a la clase obrera durante esos años: las “32 Organizaciones Democráticas” y las “62 Organizaciones”. El primero de ellos agrupó a gráficos, bancarios, ferroviarios y comercio; en tanto el segundo alineó a los metalúrgicos, textiles, Luz y Fuerza, portuarios, telefónicos, entre otros. Junto a las “62”, en el ámbito nacional, pronto quedaron alineadas las delegaciones regionales de la CGT que se hallaban normalizadas y las que se fueron regularizando en los meses siguientes. En sus inicios, las 62 Organizaciones fueron integradas por sindicatos cuyas cúpulas adherían al justicialismo y al Partido Comunista. Tiempo más tarde, los orientados por esta última tendencia se retiraron y originaron el grupo de los “19”.

El nacimiento de las “62” constituyó un fenómeno importante para el movimiento obrero porque le permitió dotarse de una dirección centralizada en el ámbito nacional para enfrentar al régimen militar. Asimismo, sus plenarios, hasta 1959, tendieron a reflejar el clima de democracia obrera reinante en numerosos gremios; sus sesiones contaron con una barra de trabajadores que presionaban, en parte, sobre las decisiones adoptadas. Por otro lado, reafirmó el papel del peronismo no sólo en la representación sectorial sindical sino también en el espacio político. Por último, cabría señalar que su conformación representó la máxima instancia de organización y permanencia que se proporcionó la clase obrera durante

la resistencia; las otras formas de lucha tendieron a diluirse, o bien, si continuaron, perdieron con el tiempo toda efectividad. En realidad, su surgimiento representaba la culminación de todo un proceso organizacional que se inició con la reconstitución de las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los sindicatos que fueron reconquistados en esos años; aunque la mayoría de ellos fueron dirigidos por hombres que ya poseían un manejo burocrático de los mismos.

La conflictividad obrera conduce a la convocatoria electoral de 1958

La mayor parte de los conflictos registrados durante 1957 se originaron por reclamos salariales. No obstante, es interesante subrayar que hubo numerosas protestas motivadas en solidaridad y en defensa de trabajadores despedidos por causas políticas y/o laborales. Entre otras, se puede mencionar la situación en ferroviarios, telefónicos, metalúrgicos, textiles, carne y navales.^{xv} En respuesta de este panorama laboral, el Poder Ejecutivo reglamentó el derecho de huelga.

Así, la situación política ejerció una fuerte presión sobre las resoluciones adoptadas en los plenarios de las 62 Organizaciones; entre otras medidas, esta entidad dispuso --en primera instancia-- un paro general de veinticuatro horas para el 27 de septiembre y luego uno de cuarenta y ocho horas, los días 22 y 23 de octubre. Incluso, en ambas protestas, acataron sindicatos que adherían al nucleamiento de los 32 Gremios; pese a la oposición de los dirigentes de esta entidad.

Por otra parte, la conflictividad gremial tuvo incidencia en el conjunto de los partidos políticos y en el proceder del régimen. La salida electoral se volvió perentoria para el gobierno cuando, producto de la aspereza de las medidas de fuerza, algunos sectores obreros elaboraron una enérgica proclama de reivindicaciones: el Programa de La Falda.

En ese contexto, para las 62 Organizaciones, la posibilidad de negociar el cese de las intervenciones, entre otros temas, con un gobierno democrático era una perspectiva factible de consumir. Asimismo, como símbolo de los nuevos tiempos, Perón acordó establecer una solución concertada con la Unión Cívica Radical Intransigente. El 23 de febrero de 1958, gracias al gran caudal electoral aportado por el justicialismo, Arturo Frondizi fue elegido primer magistrado de la nación.

ⁱ *La Nación*, 22 de septiembre de 1955.

ⁱⁱ Entrevista concedida a *United Press*, en Asunción del Paraguay, el 5 de octubre de 1955. Juan D. Perón. *La Fuerza es el derecho de las bestias*. Montevideo, Cicerón, 1958, p.11.

-
- iii *El Líder*, 17 de octubre de 1955.
- iv Enrique Arrosagaray. *La resistencia y el general Valle*. Buenos Aires, s/e, 1996, pp.54 y 55.
- v *El Líder*, 1 de noviembre de 1955.
- vi Santiago Senén González y Juan Carlos Torre. *Ejército y Sindicatos. Los 60 días de Lonardi*. Buenos Aires, Galerna, 1969, p.81.
- vii *El Líder*, 18 a 20 de noviembre de 1955.
- viii *La Nación*, 20 de febrero de 1956.
- ix Ministerio de Trabajo y Previsión. *Nuevo Régimen de Remuneraciones y de las Convenciones Colectivas de Trabajo*. Buenos Aires, Ministerio de Trabajo y Previsión, 1956.
- x Secretaría de Trabajo. *Conflictos de Trabajo*. Buenos Aires, 1968.
- xi Entre otros periódicos se consultaron: *El Líder*, *El Proletario*, *El Laborista*, *Voz Proletaria*, *Clarín*, *La Razón* y *La Nación*.
- xii *La Nación* y *El Mundo*, 9 de diciembre y *La Nación*, 19 de diciembre de 1956.
- xiii *Unidad Obrera* N°9, 14 de febrero de 1957.
- xiv *Rebeldía* N°2, 17 de julio; *Mayoría* N°15 y N°16, 17 y 22 de julio; *Voz Proletaria* N°132, 26 de julio y *Palabra Obrera*, N°1, 23 de julio de 1957.
- xv Una crónica de las medidas de fuerza en *La Razón* de 1957.